Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro.

**VISTAS** las constancias para resolver el Recurso de Revisión **00908/INFOEM/IP/RR/2024**, promovido por XXXXXXXX, en lo sucesivo **el Recurrente**, en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información **00014/PROPAEM/IP/2024**, por parte de la **Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México,** en adelante el **Sujeto Obligado**; se emite la presente resolución con base en los siguientes:

# **ANTECEDENTES**

* **Solicitud de acceso a la información pública.**

1. El **veintitrés de enero de dos mil veinticuatro**,se presentó ante el Sujeto Obligado vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en adelante SAIMEX, la siguientes solicitud de información pública:

*“solicito copia de los expedientes PROPAEM-2023-08/VT-168 PROPAEM-2023-08/VT-168, instaurado en contra del C. XXXXXXXX, RESPONSABLE DEL PROYECTO DENOMINADO “CONDOMINIO ROMA” PROPAEM-2023-08/VT-182, instaurado en contra del “PROPIETARIO OCUPANTE Y/O POSEEDOR Y/O ENCARGADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DE UNA CONSTRUCCIÓN, UBICADA UBICADO EN COORDENADAS GEOGRÁFICAS XXXXXXXXXXX MUNICIPIO DE RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO”, PROPAEM-2022-04T-71, instaurado en contra de la XXXXXXXXX. Responsable del proyecto consistente de una Planta de Asfalto, PROPAEM-2023-07/VT-145, instaurado en contra del C. XXXXXXXXX, RESPONSABLE DEL PROYECTO DENOMINADO “LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS”,” (Sic)*

* Se eligió como modalidad de entrega de la información: A través del **SAIMEX.**
* **Respuesta del Sujeto Obligado.**

1. El **trece de febrero de dos mil veinticuatro**, el Sujeto Obligado**,** dio respuesta a través del siguiente archivo electrónico***:***

***saimex 1402-13-2024-152053.pdf***

Oficio 231C0201000700T/OF.0087/2024 de fecha 13 de febrero de 2024, firmado por el Subprocurador Valle de Toluca y Servidor Público Habilitado, en el que señala que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de la Subprocuraduría se identificaron los procedimientos administrativos PROPAEM-2023-08/VT-168, PROPAEM-2023-08/VT-182, PROPAEM-2022-04T-71 y PROPAEM-2023-07/VT-145, y para tener acceso a la información de los expedientes administrativos de mérito, es necesario se acredite como tercero interesado, para lo cual deberá presentarse en las oficinas señaladas, solicitando mediante escrito sea reconocida su participación en los procedimientos de mérito como tercero interesado y una vez acordado favorablemente, podrá consultar los mismos.

Lo anterior, toda vez que el Sujeto Obligado se encuentra analizando la información y documentación que integra los expedientes de los procedimientos administrativos de mérito, ya que de hacer pública la información sin haber emitido resolución definitiva, vulneraría la conducción del procedimiento administrativo y transgrediría la esfera jurídica y la fama pública de los particulares presuntamente responsables.

* **Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad)**

1. El **quince de febrero de dos mil veinticuatro**, el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta, realizando las siguientes manifestaciones:

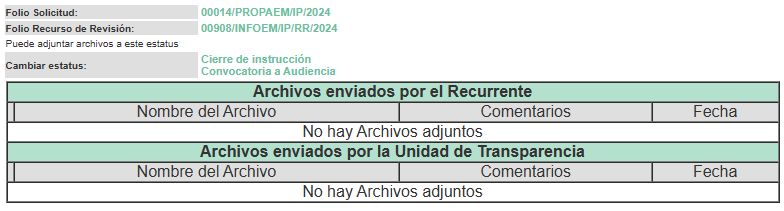
* **Acto impugnado:** *“respuesta del sujeto obligado” (Sic)*

* **Razones o Motivos de inconformidad:** *“trastoca mi derecho a la información publica exigiendome como requisito el tener el tercero interesado en los expedientes solicitados, de esta manera me niega la información violando mi derecho, ya que la procuradiría esta obligada a ponera mi dispocisión la versión publica de lo que l estoy solicitado aunado a que de ser el caso debe emitir su prueba de daño, si se trata de infromación reservada o confifencial con su respectiva resolución y acta de comite de transparencia y no manifestar que debo comaprecer como tercero intersado,”* (Sic)
* **Admisión del Recurso de Revisión.**

1. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción II, de la ley de la materia, a través del **acuerdo de admisión** de fecha **dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro,** puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía SAIMEX a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda al caso concreto, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara el Informe Justificado procedente.

* **Manifestaciones, alegatos y respuesta complementaría.**

1. El Recurrentedejó de realizar manifestaciones que a su derecho conviniera y asistiera. Por su parte, el Sujeto Obligado,tampocopresentó informe justificado, como se muestra en la siguiente imagen:



* **Ampliación para resolver y cierre de instrucción.**

1. Este Órgano Garante no pasa por alto justificar, que la dilación en la resolución del presente asunto, encuentra justificación en el incremento de recursos de revisión a resolverse por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas para la emisión de las resoluciones a dichos medios de impugnación, motivo por el que el **trece de diciembre de dos mil veinticuatro** se acordó ampliar el término para resolver el presente asunto.
2. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
3. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
4. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
5. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
6. Complejidad del Asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
7. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
8. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Seguidamente, en fecha **trece de diciembre de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente dictó el **cierre del periodo de instrucción** y, ordenó la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

## **PRIMERA. Competencia**

1. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 37 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDA. Procedencia.**

1. Este Órgano Garante considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia toda vez que: el recurso fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 178, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; asimismo no se tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia.
2. Por otro lado, el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180, último párrafo, de la citada Ley de la materia, por lo que es procedente que este Instituto conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERA.** **Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.**

1. Se solicitó tener acceso, a la información que a continuación se simplifica:

Copia de los expedientes:

1. *PROPAEM-2023-08/VT-168, en contra del C. XXXXXXXX, responsable del proyecto denominado “Condominio Roma”*
2. *PROPAEM-2023-08/VT-182, en contra del “propietario ocupante y/o poseedor y/o encargado y/o representante legal y/o responsable de una construcción, ubicada ubicado en coordenadas geográficas XXXXXXXXXX, Municipio de Rayón, Estado de México”*
3. *PROPAEM-2022-04T-71, en contra de XXXXXXXXX, responsable del proyecto consistente de una Planta de Asfalto*
4. *PROPAEM-2023-07/VT-145, en contra del C. XXXXXXXXX, responsable del proyecto denominado “Locales Comerciales y Oficinas”*
5. En respuesta, el Sujeto Obligadoremitió el archivo ya descrito en el anterior Párrafo 2. Inconforme con la respuesta, se interpuso recurso de revisión argumentando sustancialmente que se le niega el acceso a la información.
6. En dichas condiciones, la controversia a resolver en el presente proveído, corresponde a determinar si se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 179, fracción I,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado deMéxicoyMunicipios; fracción que determina la hipótesis relativa a la negativa a la información solicitada; contexto del cual se dolió el Recurrente al momento de interponer su inconformidad. De modo tal que el presente recurso de revisión se abocara en determinar si el Sujeto Obligado con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaseñalada.

## **CUARTA. Estudio de la controversia.**

1. Determinado lo anterior; revisaremos la atención otorgada por el Sujeto Obligado a la solicitud que dio origen a este recurso, considerando imprescindible establecer lo que la regulación determina, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que mandata nuestra Ley de Transparencia local, en su artículo 12, el cual establece que quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma, del mismo modo, el artículo 18, establece que los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.
2. Asimismo, es relevante mencionar que el artículo 19, del ordenamiento local de la materia señala que se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.
3. Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar información que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea porque estos las generaron o la poseen en atención a sus funciones, por lo que se le considera un bien común de dominio público, toda vez que al tratarse de acciones ejercidas por un servidor público, este lo hace en representación del Estado, por lo que le pertenece a todos y debe ser accesible a cualquier persona, ya sea que los particulares la puedan consultar por encontrarse publicada en cualquier medio de difusión o porque la requieren a través de una solicitud de acceso a la información, siempre y cuando no encuadre en una de las excepciones contempladas por la ley.

* **Del Sujeto Obligado.**

1. La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México para el estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos de su competencia, así como para atender las funciones de control y evaluación que le corresponden, conforme al artículo 8, de su Reglamento Interior, contará con una persona titular de la Procuraduría, quien se auxiliará de las unidades administrativas siguientes:

*I. Subprocuraduría Valle de Toluca.*

*II. Subprocuraduría Valle de México.*

*III. Subprocuraduría de Protección a la Fauna.*

*IV. Subdirección de Verificación y Vigilancia.*

*V. Subdirección de Auditoría, Peritajes y Registros.*

*VI. Subdirección de Atención y Seguimiento de Procedimientos.*

*VII. Unidad de Apoyo Administrativo y Gestión Documental.*

*…*

1. Para el estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Procuraduría, la persona titular de la Procuraduría, podrá delegar sus atribuciones en personas servidoras públicas subalternas, dentro de las atribuciones del titular se encuentra la de tramitar y resolver los procedimientos administrativos por sí o por alguna de las unidades administrativas de la Procuraduría debidamente facultadas para ello, conforme al artículo 12, fracción X, del citado Reglamento Interior.
2. Corresponde a las Subprocuradurías conforme al ámbito de su competencia, entre otras, ejecutar los procedimientos administrativos resultantes de las visitas de verificación y de denuncias o quejas en materia ambiental, de fauna, así como de la protección y bienestar animal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, fracción VII, del citado Reglamento Interior.
3. Podemos advertir que **EL SUJETO OBLIGADO** siguió el procedimiento inmerso en la normatividad aplicable, ya que turno el requerimiento de información a la unidad administrativa competente, vigilando lo establecido por el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, al turnar la solicitud de información a las áreas en las que pudiera obrar la información de conformidad con la fracción XXXIX del artículo tercero de la legislación local vigente en materia de transparencia:

***XXXIX.******Servidor público habilitado****: Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar, gestionar y entregar la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia; respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la información.*

1. Así las cosas, se advierte que efectivamente la Unidad de Transparencia cumplió con lo establecido en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual menciona lo siguiente:

*“****Artículo 162.*** *Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a* ***todas las Áreas competentes*** *que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.”*

1. De lo anteriormente expuesto, se advierte que, el Sujeto Obligado cuenta con facultades, atribuciones y competencia para generar, administrar y poseer la información solicitada.

* **De la respuesta inicial.**

1. De lo anterior, la respuesta fue emitida por la unidad administrativa competente, a través del Servidor Público Habilitado de la Subprocuraduría Valle de Toluca.
2. Establecido esto y atendiendo a que la controversia a resolver está estrictamente vinculada con la negativa a la información solicitada, se analizará lo requerido por el particular, ya simplificado en el párrafo 17, y la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado.
3. El Servidor Público habilitado responde en el sentido de identificar que los expedientes de los procedimientos administrativos PROPAEM-2023-08/VT-168, PROPAEM-2023-08/VT-182, PROPAEM-2022-04T-71 y PROPAEM-2023-07/VT-145 solicitados, se encuentran en los archivos de la Subprocuraduría, y para tener acceso a la información de los expedientes administrativos de mérito, es necesario se acredite como tercero interesado, toda vez que el Sujeto Obligado se encuentra analizando la información y documentación que integra los expedientes de los procedimientos administrativos de mérito, ya que de hacer pública la información sin haber emitido resolución definitiva, vulneraría la conducción del procedimiento administrativo y transgrediría la esfera jurídica y la fama pública de los particulares presuntamente responsables.
4. Por lo anterior, y como lo ha señalado el Sujeto Obligado, los expedientes administrativos de mérito se encuentran en trámite, por lo que resulta necesario puntualizar con claridad que éste Órgano Protector del Derecho de Acceso a la Información no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición de los solicitantes; situación que se aleja de las atribuciones de este Instituto.
5. En principio es de señalar que el realizar un pronunciamiento sobre la existencia de un procedimiento administrativo en trámite, podría afectar a los posibles responsables, **ya que se daría a conocer la existencia de una investigación en su contra, lo cual, generaría una percepción negativa de estos, sin que se hubiere probado su responsabilidad o culpabilidad, lo cual dañaría, su honor y su derecho a la presunción de inocencia.**
6. En otras palabras, dar a conocer la existencia de un procedimiento administrativo en trámite, vulneraría la protección de su privacidad, honor y presunción de inocencia, ya que podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que se tenga una determinación firme, donde haya quedada acreditada su responsabilidad.
7. Ahora bien, es de señalar que para aquellas resoluciones que no han quedado firmes o no han causado estado, se debe elaborar un acuerdo de clasificación de la información como reservada, bajo las causales establecidas en los artículos 113, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia, y 140, fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia del Estado, correlativo con los numerales Vigésimo noveno y Trigésimo de los Lineamientos de Clasificación; insistiendo que ello es **siempre y cuando el sujeto obligado acredite de manera fundada y motivada** que los procedimientos administrativos señalados en la solicitud de información, **no estén firmes.**
8. Por lo anterior, es de puntualizar que la clasificación de la información como reservada corresponde a expedientes administrativos en trámite, tal como lo manifestó el Sujeto Obligado en su respuesta a la solicitud de información.
9. Para entender los alcances de la fundamentación y motivación, sirve de sustento la tesis visible en la página 450, Tomo XIV, Noviembre de 1994, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente dice:

*FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.*

1. Así, para considerar que se cumple con la formalidad destacada, la autoridad emisora de un acto de autoridad que incida en la esfera de derechos de un particular, **debe darle a conocer a este, en detalle y de manera completa**, en la actuación de que se trate, la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de la autoridad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación de manera insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, por lo que, la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, debe de exponer los hechos relevantes para decidir, citando la norma y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.
2. Tal criterio se advierte de la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, que dice:

*FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.*

1. Resulta necesario mencionar que los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas, señalando que dicho cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados.
2. En este entendido, el numeral segundo, fracción XIII del documento en consulta refiere que la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.
3. De igual manera, el numeral cuarto establece que para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, **en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias,** en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.
4. De lo anterior, y en el caso que nos ocupa, se entiende que para que los sujetos obligados puedan clasificar la información con el carácter de reservada, atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia, en relación con los Lineamientos de clasificación y de conformidad las disposiciones legales aplicables a la materia, siendo en este caso la Ley de Transparencia del Estado, siempre y cuando no se contravenga con lo señalado en la Ley General.
5. Así cuando los sujetos obligados se refieran a información de carácter reservado, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba de daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.
6. Por tal motivo, para el caso de los procedimientos administrativos requeridos en la solicitud de información, de los que no se ha emitido resolución definitiva, se debe elaborar un acuerdo de clasificación de la información como reservada, bajo las causales establecidas en los artículos 113, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia, y 140, fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia del Estado, correlativo con los numerales Vigésimo noveno y Trigésimo de los Lineamientos de Clasificación; insistiendo que ello es **siempre y cuando el sujeto obligado acredite de manera fundada y motivada** que de los procedimientos administrativos requeridos en la solicitud de información, **no se ha emitido resolución definitiva,**
7. Por lo anterior, para realizar la reserva de la información invocando la fracción X, del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y VI, del artículo 140 de la Ley de Transparencia del Estado, la resolución o acuerdo de clasificación que emita el sujeto obligado deberá de acreditar que de divulgarse la información afecte el debido proceso actualizándose los siguientes elementos:
8. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
9. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
10. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y
11. Que con su divulgación se menoscaben los derechos del debido proceso.
12. Asimismo, deberá elaborar una prueba de daño conforme a lo establecido por los artículos 104 de la Ley General de Transparencia; 141 de la Ley de Transparencia del Estado; y numeral Trigésimo tercero de los Lineamientos de Clasificación atendiendo a lo siguiente:
13. Se deberá fundar la clasificación, al citar la fracción y la hipótesis de la causal aplicable de los artículos 113 de la Ley General y 140 de la Ley de Transparencia Local, vinculándolas con el Lineamiento específico de los Lineamientos de Clasificación y cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;
14. Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de **modo, tiempo y lugar** que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público;
15. Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría un riesgo de perjuicio **real, demostrable e identificable** al interés jurídico tutelado de que se trate;
16. Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberá justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en el punto anterior, que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda;
17. Deberá elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes; y
18. En caso de que se determine la clasificación total de la información, se deberán especificar en la prueba de daño, con la mayor claridad y precisión posible, los aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar certeza al solicitante.
19. Ahora bien, para realizar la reserva de la información invocando la fracción XI, del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y VIII, del artículo 140 de la Ley de Transparencia del Estado, en la misma resolución o acuerdo de clasificación deberá respecto de aquella información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, deberá acreditar los siguientes elementos:
20. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite;
21. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento; y
22. Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.
23. Para los efectos de la fracción I, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

1. No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias **o definitivas** que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.
2. De igual manera, deberá elaborar la prueba de daño atendiendo lo antes señalado, conforme a lo establecido por los artículos 104 de la Ley General de Transparencia; 141 de la Ley de Transparencia del Estado; y numeral Trigésimo tercero de los Lineamientos de Clasificación.
3. Finalmente, no se omite mencionar que de conformidad con lo establecido en el artículo 92, fracción XL de la Ley de Transparencia del Estado, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda la información relativa a **las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.**
4. En ese sentido, debemos mencionar lo dispuesto por el numeral 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que se inserta a continuación:

*“****Artículo 142.******Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando:***

*I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos, calificada así por autoridad competente;*

*II. Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;*

*III. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y*

*IV. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.”*

1. Así las cosas, la Ley de la materia reconoce a toda la información relacionada con violaciones a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción como información inmune a recibir un tratamiento de clasificación como reservada, en el margen de que, justamente, el hacer del conocimiento a la ciudadanía este tipo de conductas, atiende el objetivo fundamental de la normatividad: el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

* **Conclusión**

1. Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante considera fundadas las razones o motivos de inconformidad que plantea el **RECURRENTE**, determinando **REVOCAR** la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, por lo que con fundamento en lo prescrito en los artículos 5, párrafos vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes.

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO**. Resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer en el Recurso de Revisión **00908/INFOEM/IP/RR/2024,** en términos del Considerando **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **REVOCA** la respuesta emitida por la **Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México** y se **ORDENA** entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, la siguiente información:

1. **Acuerdo mediante el cual se clasifiquen como reservados los procedimientos administrativos señalados en la solicitud de información.**

Con excepción de aquellas se relacionen con actos de corrupción o posibles violaciones graves a derechos humanos, en términos del artículo 142 de la Ley de la materia, que deberán entregarse en versión pública.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado vía SAIMEX, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles,** e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese al **RECURRENTE** la presente resolución, vía SAIMEX.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y en lo dispuesto en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, o bien, vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.